

pación de la Santa Sede en la Conferencia de Helsinki pone de relieve la propia evolución del magisterio de la Iglesia en materia de libertad religiosa.

JOSE MARIA VAZQUEZ GARCIA-PENUELA

AA.VV., *Matrimonio concordatario e giurisdizione dello Stato. Studi sulle recenti evoluzioni della giurisprudenza*, a cura di Lorenzo SPINELLI e Giuseppe DALLA TORRE, Pátron Ed., Bologna 1987, 224 págs.

La conclusión de un nuevo Concordato, el 18 de febrero de 1984, marca una etapa importante en el derecho eclesiástico italiano. Se echaba de menos un estudio serio de la jurisprudencia italiana, así como en la jurisprudencia canónica, sobre la ejecución civil de las sentencias canónicas en materia matrimonial y de las causas de nulidad en ambos ordenamientos. Tal es el propósito del libro, bien documentado, que los profesores Spinelli y Dalla Torre realizaron con la ayuda de doce colaboradores de las Universidades de Roma y de Bologna.

Si el Concordato de 1929 había dejado a los ciudadanos una total libertad de opción entre la forma canónica y la civil, la actitud del Estado se debía, señala Dalla Torre, a su inspiración de corte hegeliana. Entonces el matrimonio se concebía como una institución ética que formaba parte de un conjunto ético que correspondía al Estado promover sin dejar ninguna puerta abierta al capricho de la voluntad individual. En ese contexto y, por otra parte, queriendo evitar la existencia de un doble vínculo matrimonial, el Estado reconoció sin dificultad efectos civiles al matrimonio canónico inscrito en los registros civiles y la ejecutoriedad civil de las sentencias matrimoniales eclesiásticas.

Después del Acuerdo de Villa Madama de 1984, los principios que inspiran la jurisprudencia italiana (a partir de una sentencia de la «Corte Costituzionale» de 1982 [n. 19] que influyó en el Concordato) son más bien personalistas, y tienden a afirmar el primado de la voluntad individual hasta el punto de tener en cuenta modalidades de familias *de facto*. En esa nueva situación de pluralidad de modelos, señala el mismo autor, resulta extraño y va contra el curso de la historia el hecho de que el Estado italiano intente restringir en su ordenamiento el papel del ordenamiento canónico e imponer el matrimonio civil como punto de referencia obligatorio.

¿Cómo se hace esta restricción? Un primer modo es la tesis según la cual el régimen actual ha suprimido la reserva de jurisdicción tradicionalmente reconocida, como es lógico, a los tribunales eclesiásticos sobre los matrimonios canónicos. Ahora bien, si el derecho constitucional de libertad religiosa deja a las partes la posibilidad de elegir la forma canónica o la civil, eso no justifica que una parte *-et invita altera-* pueda sustraer un matrimonio canónico, libremente concluido (e inscrito a efectos civiles), a la publicación de las normas canónicas y al examen del juez eclesiástico. Sostener lo contrario significaría quebrantar un principio general del derecho civil, declarado inderoga-

ble por la «Corte di Cassazione», el principio del «affidamento» en materia negocial (cf. pp. 202-203).

Además, el Estado pone «filtros» a la inscripción del matrimonio canónico para tener efectos civiles y a la ejecutoriedad de las sentencias canónicas de nulidad. La jurisprudencia italiana reconoce efectos civiles al ordenamiento canónico únicamente en la medida en que estime que haya una suficiente uniformidad entre la disciplina canónica y la civil, actitud que viene a establecer *de facto* una prevalencia del matrimonio civil. De ahí la importancia práctica del estudio comparativo entre ambos ordenamientos, que ocupa la mayor parte del libro. Varios autores estudian sucesivamente la edad, la impotencia, el vínculo, la *amentia*, la *incapacitas assumendi*, la simulación (con la subdivisión civil *vis et metus*). Las principales diferencias parecen darse en las materias del *bonum prolis* y del *bonum sacramentum* (la naturaleza sacramental confiere una firmeza sin correspondencia en el matrimonio civil) y de la *impotentia coeundi* (que propiamente hablando ya no está contemplada en el ordenamiento italiano). En cuanto al dolo, la falta de sentencias en la materia ha sido suplida por un intento de reconstrucción de los principios de los que podrían valerse los jueces civiles. La lectura de esta obra deja ver claramente, y con los debidos matices, que no solamente ambos ordenamientos no se están acercando, sino que siguen una dinámica propia.

J.-P. SCHOUPPE

AA.VV., *Le Saint-Siège dans les relations internationales*, sous la direction de Joël-Benoît d'ONORIO, coll. «Éthique et société», Ed. Cerf-Cujas, Paris 1989, 469 págs.

Este libro recoge las Actas de un Coloquio celebrado el 29 y 30 de enero de 1988 en Aix-en-Provence, por iniciativa del Departamento de Ciencias Jurídicas y Morales del «Institut Portalis», que dirige el prof. Joël-Benoît d'Onorio.

En la primera ponencia, el mismo d'Onorio centra su atención en *La Santa Sede y el derecho internacional* (pp. 9-70). La primera parte se presenta como un estudio de *la personalidad internacional de la Santa Sede*. En ella, el autor mantiene que la Santa Sede no ha dejado nunca de ser un potencia, aun después de perdida su condición de Estado, al concluirse la unidad de Italia en 1870. Lo demuestran de modo elocuente varios hechos de importancia: el crecimiento continuo del número de Estados representados ante la Santa Sede (de 14 en 1870 a 30 en 1939), los casi cincuenta acuerdos diplomáticos firmados en el mismo período y los numerosos arbitrajes del Papa en conflictos entre Estados a petición de los mismos. Con todo ello, no se confunde institucionalmente la Santa Sede con *el Estado del Vaticano*, que goza de una condición jurídica propia, cuestión en su momento ampliamente debatida y hoy en día superada, ya que si bien es verdad que durante largo tiempo sólo se reconocía a los Estados la categoría de